

de Diciembre del mismo año, que revocando la de su inferior declara: que debe continuar el procedimiento de este juicio en la vía ordinaria como desde el principio comenzó de consentimiento del Ministerio Fiscal y del denunciante Lic. Manuel Arellano.

Visto lo pedido ante esta 1ª Sala por el C. Procurador general; lo alegado al tiempo de la vista por el Lic. D. Francisco de Paula Segura, como patrono del Lic. Arellano, con los apuntamientos presentados por el Lic. German y Vasquez, como patrono de la parte de Diaz Ceballos, con todo lo demás que de autos consta, se tuvo presente y ver convino.

Considerando; primero: que el capital de 7000 pesos que en estos autos se ventila, está comprendido en el artículo 1º del decreto de 9 de Abril de 1862, por haber sido impuesto en testamento á favor de una obra pía, como lo es la casa de ejercicios que se estaba fabricando al tiempo de otorgarse dicho testamento en el lugar nombrado Santo Calvario, y que por lo mismo no es necesario que haya sido fundado.

Segundo: que los juicios que sobre esos capitales se promuevan, según lo dispuesto por la ley de 25 de Junio de 1856, y sus concordantes, deben seguirse en la vía sumaria.

Tercero: que á esto no obsta el que el presente juicio seguido entre el C. Juan Diaz Ceballos y el Lic. Manuel Arellano, se haya comenzado en la forma ordinaria por consentimiento de los interesados, porque siendo las leyes sobre nacionalización y desamortización de bienes, llamados de manos muertas, de derecho público, este no puede mudarse ni modificarse por el consentimiento ó voluntad de los particulares, como lo enseña el principio muy conocido en derecho, "juri público non potest á privatu renuntiari," se decreta:

Primero: que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el C. Juez de Distrito del Estado de Puebla, en 27 de Julio de 1872, que declara: que el pre-

TOMO V.—PARTE II.

sente juicio debe seguirse sumariamente.

Devuélvanse las actuaciones al Tribunal de Circuito de que proceden, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; hágase saber y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por mayoría de votos, los CC. Presidente y Ministros que formaron la 1ª Sala de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José María Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*M. Auza.*—*S. Guzman L. Velasquez.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia. México, Noviembre 10 de 1873.—*Alejo Gomez Eguarte.*

AMPARO.

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Sinaloa por los Sres. Melchers sucesores, contra el cobro de setecientos treinta y tres pesos, setenta y ocho centavos, que se les exige como derecho de piso de mar causados por efectos introducidos á Mazatlan.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.—El Promotor fiscal dice:—Que habiendo examinado las pruebas rendidas por los Sres. Melchers, sucesores en el juicio de amparo que han intentado contra la Tesorería municipal de esta ciudad que les exige el pago del derecho de "piso de mar" por efectos introducidos de tránsito y minerales con destino al extranjero, y encuentra:

Que en su concepto, los Sres. interesados han probado suficientemente que los artículos que introdujeron y sobre que recae este juicio, han venido á este puerto guiados como de tránsito, y que los minerales no pueden tener otro destino que el de exportación al extranjero, y que por consiguiente, conforme á las disposiciones del art. 1º de la ley de 1º de Mayo de 1868,

y 7 de Enero de 1869 y 24 de Diciembre de 1871.

Por consiguiente, el fiscal concluye su pedimento que había suspendido hasta examinar las pruebas de los quejosos, suplicando al Juzgado se sirva resolver.

Que la Justicia de la Union ampara y protege á los Sres. Melchers sucesores, contra el cobro indebido que les hace la Tesorería municipal de la ciudad, por los efectos y minerales á que este juicio se refiere.

Mazatlan, Setiembre 17 de 1873.—*L. Gaona.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Mazatlan, Setiembre 22 de 1873.—Visto este juicio de amparo promovido por los Sres. Melchers sucesores de este comercio, contra la providencia del cobro ejecutivo que el C. Tesorero municipal de esta ciudad les hace de la cantidad de setecientos treinta y tres pesos setenta y ocho centavos por el derecho de "piso de mar", que conforme al art. 5º seccion primera de la Ordenanza municipal, causaron varios efectos que á la consignacion de los mismos Sres. Melchers, sucesores, fueron introducidos á este puerto, fundando su peticion en las fracciones 1ª y 3ª del artículo 1º de la ley de 20 de Enero de 1869:

Visto el informe de la autoridad ejecutora que asegura que al hacer efectivo en sus bienes el cobro del derecho decretado, sostiene la constitucionalidad del impuesto en que el Ayuntamiento facultado por la Constitucion particular del Estado para decretar los arbitrios necesarios para subvenir á sus necesidades, ha sido autoridad competente para dictar el art. 59 de la Ordenanza, y que el referido impuesto no lo han causado efectos que hayan tocado á este puerto, sino introducidos como á punto de su final destino para procurar en él su venta.

Vistas las pruebas presentadas por los Sres. Melchers, sucesores, produciendo copias autorizadas de los documentos con que venian cubiertos los efectos desde los puntos de su partida; y de los que se les expidieron en esta ciudad por la Tesorería general del Estado y de la Aduana marítima de este puerto, consta: que una parte de ellos venian destinados á otros lugares del interior y otros para su exportacion. Y considerando: que el espíritu del legislador al expedir la ley de 19 de Mayo de 1868, que prohibe á los Estados cobrar derechos por el simple tránsito de mercancías, la de 7 de Enero de 1869 y el artículo 78 del arancel vigente de Aduanas marítimas y fronterizas que declaran libres de derechos la exportacion de piedras minerales, efectos, productos y manufacturas nacionales, ha sido el de favorecer cuanto es posible el comercio de nuestros efectos y el de proteger el importante ramo de la minería: que las disposiciones legales que con este fin han sido dictadas, serian inútiles é ilusorias si los Estados ó los municipios por donde tuvieran que tocar los efectos declarados exentos de derechos, ya sea para ser conducidos á otros Estados ó para su exportacion, pudieran gravarlos con impuestos que aunque no se les llame de exportacion ó de simple tránsito, contrarian siempre el espíritu del legislador que no ha querido se graven de ninguna manera: que el Ayuntamiento de esta ciudad aunque facultado por la Constitucion particular del Estado para decretar los arbitrios necesarios para atender á las necesidades de su municipio, no ha podido sin contravenir las disposiciones legales citadas y el art. 112 fraccion 1ª de la Constitucion general de la República, imponer el derecho de "piso de mar" á los efectos que en él se expresan, sin mas causa que de ser introducidos á la ciudad aunque vayan de simple tránsito para cualquiera otra: que los efectos porque se exige á los Sres. Melchers, sucesores el arbi-

erio municipal, están comprendidos en las leyes generales de que se ha hecho mérito, y que ellos solo han tocado á este puerto para ser remitidos á otros puntos del interior y para su exportacion al extranjero, como efectivamente lo fueron segun aparece justificado por las copias expedidas por los respectivos superiores de la Tesorería general del Estado y de la Aduana marítima de este puerto: que en consecuencia, el C. tesorero municipal al exigirles ejecutivamente el cobro de un impuesto que no estuvo en las facultades del Ayuntamiento decretar, viola las garantías que la Constitución general de la República les otorga en los artículos 16 y 27.

Por tales consideraciones, y con fundamento de los artículos 101 y 102 de la referida Constitución general, y de conformidad con la opinion del C. Asesor, fallo definitivamente juzgando con las siguientes proposiciones:

Primera: la Justicia de la Union ampara y protege á los Sres. Melchers sucesores, contra el cobro que la Tesorería municipal les hace del derecho de «piso de mar» por los efectos y piedras minerales que tocaron á este puerto, al ser remitidas éstas y parte de aquellos al extranjero y otra parte á varios puntos del interior y que de hecho continuaron.

Segunda: notifíquese, y sacándose dos copias de esta sentencia, remítase una al Semanario Judicial, y la otra á uno de los periódicos de esta ciudad para su publicacion, mandándose los autos á la Suprema Corte de Justicia para su revision. Lo proveyó y firmó el C. Maximino Barragan primer suplente del Juzgado de Distrito del Estado, en ejercicio. Doy fé.—*Maximino Barragan*.—*Francisco Medina*,—secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Noviembre 21 de 1873.

Visto el recurso de amparo promovido ante el C. Juez de Distrito del Estado de Sinaloa, por los Sres. Melchers sucesores del comercio de Mazatlan, quejándose de que se ha violado en sus personas la garantía consignada en el art. 16 de la Constitución federal, con la providencia del C. Tesorero municipal de esta ciudad, que les cobra ejecutivamente la cantidad de setecientos treinta y tres pesos, setenta y ocho centavos, por el derecho de «piso de mar» que conforme al art. 59 sección 13 de la Ordenanza municipal, causaron los efectos que á la consignacion de los mismos Sres. Melchers sucesores, fueron introducidos á ese puerto, fundando su peticion en las fracciones 1ª y 3ª de la ley orgánica de 20 de Enero de 1869.

Vistas las constancias de autos; las pruebas y alegatos presentados por las partes, y la sentencia del Juez de Distrito que concedió el amparo pedido, de conformidad con el parecer fiscal y el dictámen del asesor consultado para fundar en derecho la decision de este recurso; y considerando:

Que el art. 89 de la ley de 20 de Enero de 1837 dispone, que «ningunas providencias coactivas tendrán lugar sino en los casos en que el derecho fiscal sea claro é indudable, conforme á las leyes y disposiciones vigentes» y que el derecho fiscal del Ayuntamiento de Mazatlan carece de esas calidades, conforme á las leyes y disposiciones vigentes aplicables al caso en cuestion; pero que estando probado en autos, que los efectos cuyo impuesto se cobra á los Sres. Melchers sucesores, segun la liquidacion formada por la Tesorería municipal, venian destinados desde los lugares de su partida para otros lugares del interior del país y tambien para su exportacion, como en efecto se verificó así, segun aparece justificado de las copias certificadas de los documentos

aduanales, espedidos á solicitud de los interesados por la Tesorería general de rentas del Estado, y por los CC. Admor. y Contador de la Aduana marítima, no podían ser gravados con el repetido impuesto establecido por la Ordenanza municipal sin contrariar la fracción 9ª del art. 72 y fracción 1ª del 112 de la Constitución federal, así como las leyes generales de 1ª de Mayo de 1868, 7 de Enero de 1869 y el art. 78 del Arancel de aduanas marítimas de 1ª de Enero del año próximo pasado.

Considerando: que si conforme á la Constitución y leyes citadas, no puede fundarse la legalidad del cobro que se exige á los promoventes, ese derecho municipal que se impugna, no ha podido ser claro é indudable, ni ha debido tener lugar en consecuencia, "ninguna providencia coactiva" como espresamente ordena el mencionado artículo 3º de la ley de 20 de Enero de 1867, no obstante la autorización que conceden á los Ayuntamientos de Sinaloa para decretar los arbitrios necesarios, los arts. 57 y 58 de la Constitución del Estado; y de consiguiente, los procedimientos del Tesorero municipal de Mazatlan constituyen una violación en las personas de los quejosos, de la garantía que reconoce el art. 16 de la Constitución de la República.

Por lo espuesto, y con fundamento de la ley de 20 de Enero de 1869, se resuelve lo siguiente:

Se confirma la sentencia pronunciada en Mazatlan á 22 de Setiembre último por el Juez de Distrito, declarándose: que la Justicia de la Unión ampara y protege á los Sres. Melchers, sucesores, contra el cobro de setecientos treinta y tres pesos setenta y ocho centavos, que se les exige en virtud de lo dispuesto en la Ordenanza municipal de Mazatlan sobre los efectos que se introdujeron á ese puerto, de simple tránsito y á la consignación de los mismos Sres. Melchers.

Devuélvanse los autos al Juzgado de su origen con copia certificada de esta senten-

cia; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los C.C. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José M. Iglesias.—Juan J. de la Garza.—José M. Lozano.—José Arteaga.—P. Ordaz.—Ignacio Ramírez.—M. de Castañeda y Najera.—J. M. del Castillo Velasco.—M. Auza.—S. Guzman.—L. Velasquez.—M. Zavala.—José García Ramírez.—Enrique Landa,* secretario.

Es copia que certifico. México, Noviembre 25 de 1873.—*Enrique Landa,* secretario.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Puebla por la Señora Doña Joaquina Martínez, contra la orden del C. Gefe político, que previno al C. Juez menor Vicente Aguilar, la suspensión de la ejecución de la sentencia que recayó á favor de la quejosa.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

La queja que ha elevado ante V. la promovente, está en manos del Juez que conoció en ese negocio, y á él toca determinar lo conveniente sobre las escepciones de la Gefatura política para enervar el pago de la cantidad á que salió sentenciado el diurno ó diurnos de que se habla en el ocurso. Así pues, el presente recurso no procede, por no poderse admitir en los negocios judiciales, según el artículo 8º de la ley de 20 de Enero de 1869. Con fundamento de este artículo, el Promotor pide á V., deseche el amparo interpuesto por Doña Joaquina Martínez, no condenándola en la multa que pre-